

Quien tenga ojos,

Este es un tiempo de esperanza para muchos, las encuestas revelan que un 75% de los venezolanos piensan que el presidente Chávez lo hará bien y otro tanto cree que su situación personal mejorará. Los restantes, escépticos, critican la incontinencia verbal, la poca atención a las tareas de gobierno, la recesión económica, el equipo ministerial, el uniforme, etc., pero para la gran mayoría hay esperanza de cambio. Sin embargo, todos, aun los más acérrimos opositores, concuerdan en que como íbamos no podíamos seguir.

No es posible vivir, como si nada, en un país en donde el 40% de la gente vive en la miseria más absoluta y sin esperanza. Es una bomba de tiempo. Peor aún: no es justo.

Durante la campaña electoral, Chávez se refirió con frecuencia al tema de la pobreza y la genuina sensibilidad que transmitía, frente al abandono de tantos, le generó no pocos adeptos. Aun entre algunos, no muchos, de los que no votamos por él hay simpatía ante esta preferencia por los pobres que los coloca en un honroso segundo lugar, después de las Fuerzas Armadas.

A lo mejor ingenuamente, abrigábamos la esperanza de que la próxima batalla del Comandante, luego de su triunfo electoral, sería una lucha sin cuartel contra la pobreza. Siendo éste uno de los temas centrales de su campaña, era de esperar en los primeros meses de su administración una acción clara de gobierno para mejorar la calidad de vida de los pobres.

¿Cuál ha sido la realidad de los primeros doscientos días? Ceremonias, discursos, palabras, muchas palabras y, desde luego, el Plan Bolívar 2000. El Plan Bolívar 2000 luce concebido en la

mejor tradición adeca. Cada elector tiene derecho a una plancha de zinc, a una consulta odontológica, a un corte de pelo o a un descuento en su compra de abasto. No deja de ser un adelanto el hecho de que cualquier elector es elegible.

¿Puede considerarse el Plan Bolívar 2000 bien concebido dentro de un esfuerzo nacional de superación de la pobreza? Difícilmente.

Una de las barreras culturales que, según los expertos, dificultan la superación de la pobreza es el convencimiento de que el individuo no tiene ningún margen de control sobre su realidad: quien nació pobre, ha de morir pobre, a menos que alguien -la lotería, el gobierno, el partido, Chávez- lo libere. El clientelismo y el paternalismo, como políticas de Estado, refuerzan esta cultura y resultan políticas perversas con relación a la pobreza. ¡Ya tenemos cuarenta años de evidencia acumulada!

A veces es necesario un pañito caliente y después de casi diez años de recesión, durante los cuales los venezolanos hemos visto nuestra capacidad de generación de ingresos disolverse ante nuestros ojos, sin duda era necesario un gesto de solidaridad, un alivio, un rayo de esperanza, pero de ahí a que el Plan Bolívar 2000 pueda considerarse un elemento eficaz de política social, hay mucho trecho.

Política social ¿para qué?

La política social de Estado debe garantizar la prestación de un conjunto de servicios que son indispensables para que la gente pueda contar con los medios mínimos necesarios para proveerse de los bienes materiales para su subsistencia en el mercado de trabajo. Den-



No es posible vivir, como si nada, en un país en donde el 40% de la gente vive en la miseria más absoluta y sin esperanza. Es una bomba de tiempo. Peor aún: no es justo.

no puede tener dudas

tro de este marco tradicionalmente se han ubicado las políticas relativas a educación, salud, subsidios, programas compensatorios, etc.

Sin embargo, en la coyuntura actual la acción más eficaz que podría emprender el Estado, dentro de ese esfuerzo nacional de superación de la pobreza que debemos promover, es la rehabilitación de los servicios públicos domiciliarios más indispensables: agua, electricidad y transporte.

Mejorar el acceso y la calidad de los servicios públicos tiene un impacto inmediato y positivo en las oportunidades de los más pobres para mejorar su calidad de vida y su nivel de ingresos.

Alguien escribió que los servicios públicos son la escalera de los pobres para subir y salir de la pobreza y en verdad es mucho el tiempo productivo que una familia pobre puede liberar con tan solo disponer de los servicios básicos. ¿Cuánto tiempo debe dedicar la cabeza de familia, usualmente mujer, a acarrear agua? ¿a hervirla? ¿a esperar por un transporte público? Debe ser muy duro después de un día de trabajo regresar a casa y tener que subir esas interminables escaleras, sin luz.

En Venezuela se han creado diversos fondos de inversión social para el rescate de la infraestructura de barrios. El problema de estos fondos es que normalmente se aplican a tareas que generan empleo y no necesitan mayor especialización: construir aceras, pintar fachadas, limpiar quebradas, etc. La recuperación de los servicios o ampliación de su cobertura son proyectos más complicados los cuales, además, luego necesitan quien los mantenga y los opere.

¿Cómo garantizar el acceso?

Para garantizar el acceso a todos los servicios públicos, es necesario definir políticas de subsidio, eficientes y focalizadas, pues una de las principales barreras a la efectiva provisión de servicios públicos ha sido, paradójicamente, la prevalencia de un enfoque populista empeñado en el mantenimiento de tarifas y precios bajos.

La diferencia entre la factura y el costo del servicio para los consumidores subsidiados (todos los clientes de la clase residencial) normalmente la pagan (porque al final siempre hay alguien que tiene que pagar la cuenta) la industria y el comercio.

Las consecuencias son perversas y regresivas. Al comprar un kilo de maíz el consumidor está pagando también parte de la factura del aire acondicionado integral de muchas residencias o el riego automatizado de sus jardines.

Tiene mucho más sentido diseñar subsidios cruzados entre los consumidores de una misma clase, de manera que el costo de los servicios públicos para los más pobres sea parcialmente subsidiado por el consumo suntuario que tiene lugar dentro de cada clase.

Es relativamente sencillo establecer cuál es el consumo básico de agua o de electricidad que corresponde a un grupo familiar, ese consumo debería tener un precio igual al costo de proveerlo. El consumo excedente debe considerarse suntuario y, en consecuencia, tener un precio unitario mayor que se incrementa en la medida en que el consumo aumenta, de manera tal que permita cubrir parcialmente el costo del servicio de aquellos que aún no están en capacidad de pagarlo. Esta política se-

ría perfectamente extrapolable a las clases industrial y comercial y sería una manera de estimular a la pequeña industria y bajar los costos fijos en el comercio vecinal.

La transición

Al estudiar el Programa Económico de Transición 1999-2000, la mayoría de las medidas propuestas para reactivar la economía son leyes o proyectos de leyes y, desde luego, es importante que las actividades económicas tengan un marco legal que las dote de la estabilidad necesaria, pero no es suficiente.

No fue con leyes o con discursos que se construyó el Metro de Caracas o la Presa de Guri. Venezuela nunca ha tenido una ley que regule la prestación del servicio eléctrico -está prevista en el Programa Económico de Chávez- y el 93% de la población tiene acceso al servicio, lo mismo puede decirse del abastecimiento de agua potable.

Para recuperar el crecimiento económico, disminuir el desempleo y promover la inversión, es necesario ir más allá de las palabras, hace falta voluntad y compromiso, gerencia e ingeniería, en pocas palabras: trabajo.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de encontrar un "proyecto de país", quien tenga ojos, no puede tener dudas. Antes de plantearnos la guerra de las galaxias, la navegabilidad del eje Orinoco-Apure o cualquier otra cosa, los venezolanos tenemos una tarea pendiente: rescatar de la pobreza a más de la mitad de la gente que vive en nuestro país.

AMELIA CRESPO

Ingeniera civil, planificadora